

CRITERIOS MORALES DE LA ACTUACIÓN DE ABOGADOS Y PERITOS EN LAS CAUSAS MATRIMONIALES *

CARMELO DE DIEGO-LORA

1. He de aclarar, por anticipado, al comenzar esta lección, que al servirme de la presente rúbrica —no sugerida por mí sino encontrada tardíamente, después de haber aceptado hablar de este tema— no intento formular aquí una serie de reglas que puedan ser entendidas como *vademecum* de soluciones deseables a los problemas morales que plantea el ejercicio respectivo de la abogacía y el de la pericia médica.

De otra parte, conviene a la vez dejar claro de antemano que el tema de la presente lección —y ya lo anuncia su título— versa sobre las causas matrimoniales. Y resulta oportuno precisar, al mismo tiempo, que nos reducimos a las causas de nulidad matrimonial, que, por otra parte, no dejan de ser las que absorben, por su volumen e importancia, la casi totalidad de la actividad contenciosa de los tribunales eclesiásticos.

Mas todavía se ha de añadir, configurando el tema en una última delimitación, que las causas de nulidad matrimonial, a las que nos referiremos, aluden siempre al matrimonio canónico, es decir, que hemos quedado introducidos de lleno en el plano sacramental y ante el juicio humano sobre lo que, siendo del hombre, no le pertenece sin embargo, sino que pertenece a la relación del hombre con Dios, en un marco humano de aptitudes, advertencia y libertad, del que se genera, entre los cónyuges, un vínculo jurídico indisoluble. Nos movemos, pues, en el ámbito del Derecho canónico y no en el de las convenciones meramente humanas, regidas por el Derecho civil, sujetas exclusivamente al arbitrio de la autonomía de la voluntad. Conviene, pues, recordar aquel viejo axioma, por todos conocido, *sancta sancte tractanda*: las cosas santas han de ser tratadas santamente.

* Texto leído en el XXII Curso de Actualización en Derecho Canónico, «Moral y Derecho ante la conflictividad matrimonial», Universidad de Navarra, 18-20. IX. 2000.

Quizás este planteamiento, a primera vista, pudiera juzgarse que está mostrando un perfil un tanto exhortativo, en cuanto expresión de un requerimiento de respuesta exigente, fundamentada en razones pertenecientes a la más profunda vida moral del hombre, en cuanto su quehacer tiene unas resonancias trascendentales. En cambio podría pensarse que, para el ejercicio de una profesión, en este caso la profesión liberal de abogado, sería bastante, es decir, entender como suficiente, el proceder únicamente con actuaciones ajustadas a deberes éticos, bien delimitados por las costumbres generalizadas, observadas por los buenos expertos de la profesión, sin más responsabilidades que las que derivan de la lealtad al cliente y de la posesión de una adecuada competencia profesional.

Tal modo de proceder, cabría pensar, sería suficiente para satisfacer las responsabilidades con que se ha de enfrentar el buen profesional en el ejercicio de las tareas propias de su trabajo. Sin embargo, ésta sería una actitud reductiva de la importancia de la actividad profesional, y sobre todo, empujeña la verdadera imagen del profesional como si se pudieran substraer del hombre sus dimensiones de mayor nobleza y de superior calidad, por pertenecer a su naturaleza espiritual, para sólo contentarse y exigirle responsabilidades surgidas a ras de tierra; como si pudiéramos dividir al hombre con un fino bisturí en dimensiones distintas y hasta incomunicadas, cuando, por el contrario, el hombre, el profesional del derecho, siempre que actúa —en lo grande y en lo pequeño, en lo que es importante y en lo que no lo es— lo hace con la plenitud de su personalidad, comprometiéndose en su totalidad, logrando aciertos, o incurriendo en errores, atribuibles siempre a la integridad de su ser. La dignidad humana se asienta en esa plenitud del hombre, y constituye también el supuesto civil de la convivencia pacífica, del respeto mutuo y de la comprensión recíproca que conduce al reconocimiento de los derechos ajenos y hasta al perdón de las injurias recibidas.

La actividad profesional, por tanto, está sometida a exigencias morales que trascienden al hombre mismo. Y entendemos que tal ejercicio compromete la totalidad del hombre, y llamémosle moral, o meramente conducta ética profesional, siempre estaremos contemplando —y exigiendo— un óptimo de la conducta del profesional, máxime cuando se trata del abogado, es decir, del profesional del derecho, de aquel cuyo ejercicio profesional consiste fundamentalmente en procurar que se haga efectivo el *ius*

de su cliente, es decir, que su cliente logre ver satisfecha la justicia a la que rectamente aspira y conforme a métodos justos, es decir, métodos que no conculquen las legítimas expectativas y justas aspiraciones de sus oponentes. La palabra deontología, entendida como ciencia y arte del ejercicio profesional, nos pone ya en camino de que estamos refiriéndonos a un deber ser de la profesión. No nos ilustra sólo la deontología jurídica sobre cómo ha de proceder el abogado para que a su cliente se le reconozca la justicia que merece recibir, sino también sobre cómo debe ser esa actuación para acceder a la justicia, de tal manera que los comportamientos para alcanzarla sean asimismo los debidos, los justos en cada caso.

Incluso, cuando nos encontramos en un ámbito de ética profesional meramente laica, no dejará de enseñarse por sus cultivadores que la profesión no sólo es un medio para el sustento personal, ni tampoco un servicio dirigido exclusivamente a satisfacer los deseos, aparentemente legítimos al menos, de un cliente, sino «sobre todo una actividad humana social con la que se presta a la sociedad, de forma institucionalizada, un bien específico e imprescindible». Lo que se proporciona, con toda profesión, a la sociedad y a los hombres en particular, es «un bien específico», es decir, un resultado objetivo favorable que no dañe a nadie y beneficie a quien le corresponda. Cuando este bien es el de la justicia, conseguirla no sólo beneficiará a quien pertenece ese *ius*, sino que por ser la justicia siempre un bien objetivo de alcance social, a todos, al menos indirectamente, beneficia.

La ética profesional del abogado se especifica en cuanto coadyuva, con el reclamante, a quien se le debe un bien jurídico que le es propio, a la realización de la justicia en la sociedad. Por ello, y traigo de nuevo a nuestra relación la continuidad de la cita anterior, «el profesional [y en nuestro caso el abogado] debe vivir su actividad como vocación en el sentido que debe contar con las aptitudes requeridas para proporcionar ese bien y debe ser consciente de la valía del servicio que presta, anteponiéndolo a su interés egoísta»¹.

2. Para todo abogado, que desarrolla su labor profesional en los Tribunales de la Iglesia, en los que se debaten estas causas de nulidad

1. CORTINA, A., en VV. AA., *10 palabras clave en ética de las profesiones*, Estella (Navarra) 2000, p. 27.

matrimonial, se exigirá, por el c. 1483, que sea mayor de edad, es decir, que posea una madurez mental y volitiva que le permita, consciente y libremente, disponer de sus propias cosas e intereses; pero además, una formación intelectual idónea para el ejercicio de la profesión de abogado en los tribunales, una verdadera pericia en derecho canónico. Pero a estas condiciones, que se requerirían en general, *mutatis mutandis*, en lo referente a la idoneidad técnica para todo abogado en cualquier tipo de tribunal en que actúe, por tratarse de abogados que actúan en ámbito canónico, en el que la suprema *lex* es la salvación de las almas, se les exige también, en razón al bien de la Iglesia, no sólo el que sea católico, salvo que especial autorización del Obispo disponga lo contrario, sino también algo así como una reputación social favorable acerca de su conducta moral bajo la calificación de la buena fama. Más aún, para las causas de nulidad de matrimonio, como sabemos, el Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica sancionó, en su Respuesta de 17 de julio de 1993, la incompatibilidad para ejercer la abogacía en causas matrimoniales a los abogados que viven en una unión irregular o que hayan intentado el matrimonio civil. El abogado, pues, en las causas de nulidad de matrimonio, ha de mostrar una conducta formalmente coherente al menos, y no en contradicción, con el bien específico del matrimonio indisoluble.

No son solamente, pues, las condiciones subjetivas del abogado las que se han de valorar respecto al ejercicio de su profesión en las causas matrimoniales, sino también, entre otros condicionamientos, se ha puesto de relieve la exigencia relativa a su propia postura personal respecto al matrimonio canónico. En rigor, se está ya descubriendo, de un modo relevante y prioritario, que la Iglesia vela desde el comienzo mismo del ejercicio profesional del abogado, en las causas matrimoniales, por el valor canónico del objeto procesal impugnado, mientras no medie sentencia firme de nulidad, hasta el punto de incidir ese bien específico de tal manera en el proceso que viene a constituir un requisito *sine qua non* de las condiciones subjetivas de los propios abogados de parte que han de actuar como tales en estos procesos especiales.

3. Ciertamente que la nulidad de un acto jurídico no se puede contemplar en ningún ordenamiento jurídico como un *desideratum* de dicho ordenamiento, puesto que, en cierto modo, todo fenómeno jurídico de nulidad, sea contractual, sea de testamento, sea de un acto admi-

nistrativo, es indicativo más bien de un actuar, sea de los ciudadanos o de la Administración pública, contrario a las exigencias jurídicas de cualquier ordenamiento en una hipótesis concreta. Por esto no nos puede extrañar que en el ordenamiento canónico el c. 124 § 2 proclame la presunción general de validez de todo acto jurídico debidamente realizado en cuanto a su elementos externos. Y esto no ocurre sólo en el ordenamiento canónico. Hemos de señalar que, en cualquier ordenamiento jurídico, a los actos jurídicos se les protege con las formas externas requeridas para que, observadas éstas, su contemplación *prima facie* envuelva bajo presunción *iuris tantum* la validez del acto realizado, si se cubren tales exigencias formales. Por ello, la nulidad de un acto jurídico, realizado de forma externa aparentemente correcta, es siempre una cuestión que sólo puede resolverse en el ámbito judicial, tras acreditarse en el contradictorio procesal, ante el juez competente, que lo presuntamente válido no lo resulta efectivamente y ha de quedar por tanto sin efecto alguno.

Por ello, se ha de estimar como exagerada y fuera de contexto, la afirmación de que el principio *favor iuris* con que el c. 1060 tutela al matrimonio correctamente celebrado externamente—o en el Código anterior, el hoy derogado c. 1014— podría presentarse como una afirmación legal apriorística contraria al principio *favor libertatis*; o que, invocándose un cierto personalismo cristiano, se quisiera como dar a entender que el ordenamiento canónico en materia de nulidad matrimonial sobrepone de un modo absoluto la observancia de los efectos que derivan del derecho formal a los requerimientos que puedan proceder desde el prisma de la libertad humana o desde las inquietudes, deseos e incluso necesidades de las personas.

Desde esas posturas no dejan de suscitarse juicios y actitudes de carácter crítico, respecto a la nulidad del matrimonio, tal como es entendida y reconocida por la Iglesia. Como si la Iglesia se opusiera institucionalmente a la nulidad del matrimonio. Incluso, he observado, tanto en publicaciones como en opiniones manifestadas por algunos que cumplen responsabilidades en tribunales eclesiásticos, que se llega a tachar a la jerarquía eclesiástica de adoptar una actitud, respecto a la nulidad matrimonial, que puede justificar el abandono por algunos fieles de la práctica religiosa; o mover a los cónyuges a que se decidan acudir con

facilidad al divorcio, en perjuicio de la propia Iglesia. Ésta se viene a presentar, entonces, como quien debiera estar interesada en retener una clientela que se le puede estar alejando por las dificultades que muchos de sus súbditos encuentran para conseguir la nulidad en el caso de hallarse en medio de problemas relacionados con su matrimonio.

Se olvida con tal enfoque de la nulidad que la Iglesia, como toda organización jurídica que posee un ordenamiento primario, quiere la validez de los actos jurídicos que se realizan en su espacio de juridicidad, pero que igualmente se pronuncia por la nulidad del matrimonio cuando ante ella, en el ámbito jurisdiccional apropiado a este efecto, se acredita efectivamente la nulidad. La validez se muestra mediante la prueba preconstituida a este efecto arbitrada por el ordenamiento canónico: el certificado matrimonial; en cambio, la nulidad se declarará, una vez comprobado procesalmente el vicio que la originó, por sentencia que adquiere firmeza por la doble conformidad. Ni cabe decir que el ordenamiento canónico apueste por la validez como tampoco apuesta por la nulidad. Depende del instrumento acreditativo que corrobore uno u otro fenómeno jurídico, cada uno garantizado por un título jurídico *ad hoc* previsto o concedido a uno y otro efecto.

Cierto que el c. 1676 advierte que antes de aceptar una demanda de nulidad, en la que el juez vea esperanzas de convalidación, deberán emplearse medios pastorales para inducir a los cónyuges a convalidar el matrimonio, pero cierto también que esto depende en definitiva, como en toda avenencia, de la libre voluntad de los cónyuges, aunque los abogados no se hallarán siempre exentos del deber moral, teniéndose en cuenta las circunstancias del caso, de animarlos a intentar la posible convalidación. Por otra parte, se hace preciso dejar constancia también de que difícilmente encontraremos en cualquier otro ordenamiento jurídico una atención más amplia a las normas jurídicas que causan la nulidad de los actos jurídicos como las que se derivan de los cánones que regulan la forma del matrimonio, la incapacidad de los contrayentes, los vicios del consentimiento, los impedimentos establecidos. Y esto se normativiza con tanta atención porque el legislador canónico se halla tan motivado a que los matrimonios celebrados *in facie Ecclesiae* sean válidos como que, si incurren en alguna causa de nulidad en el Código regulada, tales matrimonios se declaren radicalmente nulos. En rigor, al ordenamiento y al

proceso canónico lo que les mueve es la verdad del acontecimiento, a la vez jurídico y sacramental, celebrado. Por ello el juez solo se ha de pronunciar *pro rei veritate*. Aquí realmente reside esa concepción tradicional, ya consagrada en los textos legislativos romanos sobre la jurisprudencia, y con mayor razón para la jurisprudencia canónica, que no puede ser otra, y así lo reconocieron diversos Romanos Pontífices cuando asumieron la tradicional definición de jurisprudencia: «*Divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque injusti scientia*» (L. 10, 1, 1).

Oportuna fue la Alocución de SS Pío XII, de 2 de octubre de 1944, dirigida a la Rota Romana, frente a las posturas interpretativas extremas *ad validitatem matrimonii*, cuando hizo ver que al Defensor del vínculo incumbe sostener la existencia del vínculo conyugal «no de un modo absoluto, sino subordinadamente al fin del proceso, que es la investigación y el resultado de la verdad objetiva», calificando de falsa la afirmación de que tal defensor debe moverse siempre no *pro rei veritate matrimonii*, sino *pro validitate matrimonii*, de modo incondicionado y con independencia de los resultados del proceso. Aquellas palabras de Pío XII², han sido de nuevo subrayadas por Juan Pablo II, en su Alocución a la Rota Romana, de 25 de enero de 1988, al recordar que el Defensor del vínculo «está llamado a colaborar en la búsqueda de la verdad objetiva sobre la existencia o no de nulidad del matrimonio en casos concretos». Y a su vez indicó que este «papel específico, al colaborar en el descubrimiento de la verdad objetiva, consiste en la obligación de proponer y exponer todas las razones que pueden aducirse contra la nulidad»³.

4. Correlativamente, el abogado cumplirá su papel en el proceso de nulidad de matrimonio atendiendo en primer lugar a la defensa de los derechos de la parte a la que asiste, que en estos procesos suelen ser los de la parte que pretende la declaración de nulidad. Como pormenorizó SS Pío XII, en la Alocución antes citada, el abogado «ayuda al cliente en la redacción del libello (...); en la recta determinación del objeto y del fundamento de la controversia, en la ilustración de los puntos decisivos del hecho que ha de ser juzgado; le sugiere qué testimonios han de ser aportados en el juicio; qué capítulos sean perentorios en las declaracio-

2. AAS 1942, p. 28.

3. El texto castellano de la Alocución citada está recogido de *Ecclesia*, 13 de febrero de 1988, p. 20.

nes de los testigos; durante la causa ayuda al cliente a discriminar rectamente las excepciones y los argumentos contrarios y para refutarlos también; recoge todas las palabras y mueve cuanto puede ser aducido en favor de la persona que patrocina». Pues bien, a continuación, en medio de esa enumeración de actividades del abogado, tan múltiples en su diversidad, y en las que el abogado ha de emplear todo su interés para hacer triunfar la causa de su cliente, no puede nunca el abogado —señala el Romano Pontífice— «sustraerse del único y común objetivo», al que ha de quedar subordinado «en todas sus condiciones, en sus consejos, en sus afirmaciones y pruebas». Ese único y común objetivo no puede ser otro que el de buscar la verdad.

El abogado ha de vivir siempre la lealtad con la parte, a quien sirve y a cuyo interés, en cuanto se le presenta como legítimo, se adhiere voluntariamente: no sólo por la remuneración que espera recibir en justicia por su trabajo, sino porque estima que debe encontrar en los Tribunales la tutela jurídica que su defendido merece. Desde tal punto de vista, el abogado no sólo es servidor, con su ciencia, con su experiencia, con su actividad, del cliente, sino en todo caso también ha de ser adalid de la justicia. Por esto se ha dicho, con razón, que cuando se descubre al verdadero abogado no es precisamente cuando, por su colaboración, triunfa la justicia pretendida por el cliente, sino, al principio, cuando estudiadas todas las circunstancias de la causa, que va a ser sometida a controversia, el abogado muestra esa máxima lealtad al cliente de aconsejarle que no plantee la demanda, o le invita, alcanzado ya el proceso, a que desista de la pretensión formulada.

Actitudes como las indicadas, pueden a veces resultar heroicas para quien ejerce la profesión de abogado, pero, a nuestro juicio, en los procesos de nulidad de matrimonio, no deja de ser el primer deber que la lealtad con la parte requiere al abogado, que es también lealtad con el otro cónyuge y con la Iglesia misma.

El abogado, aunque haya de sacrificar sus sentimientos a veces, o su compasión con el cliente afligido que le expone sus problemas, no puede considerar la nulidad matrimonial como un socorro para apaciguar criaturas atormentadas, ofreciéndoles inmediatas soluciones que puedan congraciarle con su cliente, como ocurriría con la creación forzada de unas apariencias formales favorables a sus intereses, si tal solución no es

coherente con la verdad. El abogado debe estar en principio convencido de la realidad de la situación en la que se encuentra su cliente respecto al matrimonio, ya cuando lo que se pretende es su impugnación, como cuando se trate de defender su validez a ultranza, a pesar de evidentes señales que ilustren su invalidez. En caso extremo, podría aceptarse en el abogado una aceptación de la causa fundada en una duda prudente de la nulidad del matrimonio, pero habrá de informar al tribunal de las razones que apoyan su pretensión en búsqueda de que el órgano judicial decida lo justo tras la prueba pertinente

Por ello, en la citada Alocución a la Rota Romana, añadía el Romano Pontífice, refiriéndose, una vez más, al abogado, que esa persuasión suya acerca de la verdad de su defensa, «no sólo le preserva de construir las cosas artificiosamente, de aceptar el patrocinio de causas carentes de todo fundamento, de inducir a las partes y a los testigos para declarar en falso, de recurrir a cualquier otra acción inhonesta; sino que también positivamente le estimula a obrar según el dictamen de su conciencia, en toda la serie de acciones de la causa».

El abogado es parcial en el proceso, es decir, participa de los intereses y expectativas de la parte a la que asiste, como también el Defensor del vínculo es parcial en su deber de proponer y manifestar todo aquello que puede aducirse —«razonablemente», intercala el c. 1432— contra la nulidad. Sin embargo, estas respectivas actitudes parciales y enfrentadas son las que conducen —y vuelvo a utilizar palabras del Papa Pío XII en la referida Alocución— «al término supremo, que es poner la verdad en plena luz». Ahí «es preciso que converjan tanto la labor del Abogado como la del Defensor del vínculo, ya que ambos, aunque acometen la cosa desde distintos puntos de vista y con fines próximos distintos, deben, sin embargo, tender al mismo objetivo final».

Por ello, con tal visión acerca de los papeles de las partes enfrentadas en el proceso, portadoras de intereses divergentes y con posturas inconciliables respecto a la verdad del objeto del proceso, un sector de la doctrina procesal, en la que modestamente milito, intenta adentrarse en la naturaleza del proceso, pronunciándose, en contraste con otras posturas —unas ya harto superadas, como la del contrato o la del cuasicontrato, otras de mayor actualidad, como la de la relación jurídica o la de la situación jurídica—, por la teoría de la institución jurídica, integradora de tan-

tos y diversos contradictorios elementos, que, a pesar de sus divergencias, realiza la permanente idea de que lo que se ha de alcanzar es la verdad para poder asentar sobre ella la justicia. El poder moderador del órgano judicial (c. 1470) y el de iniciativa *ex officio* (c. 1452) irán rectificando y ordenando para que no deje de cumplirse el fin institucional del proceso.

5. Pero la rúbrica con que se enuncia esta lección no solo se refiere al abogado. También hay una expresa mención a los *peritos*.

He de tener aquí la precaución de restringirme a los criterios morales en la actuación del perito en las causas matrimoniales y evitar introducirme en la problemática de la prueba pericial, en la que, por otra parte, contamos con una rica jurisprudencia de la Rota Romana, así como de unas aportaciones doctrinales procedentes de autores españoles, como García Faílde, Gil de las Heras, con una importantísima experiencia en la valoración de esta prueba, tan importante, en el proceso canónico, y en especial en el de nulidad de matrimonio: hasta el punto de que el c. 1579 prescribe que en la sentencia, siga el juez o no siga las conclusiones del informe pericial, debe exponer en su fundamentación los motivos de haberlas aceptado o, por el contrario, rechazado. La pericia —y perdonarme la metáfora— no deja de ser, para el juez, el pentagrama cuyas notas ha de tener en cuenta en el discurso de su personal aplicación de la Ley. La interpretación que haga el juez servirá, sea para repetir la versión del perito si resuelta convincente, o, por el contrario, para proseguir su interpretación personalísima a pesar de las indicaciones escritas de la partitura. El perito es el que sabe, desde el punto de vista científico o técnico, cómo han de ser leídos los datos de esta naturaleza que inciden en el objeto del proceso. El juez es, en definitiva, quien ha de interpretarlos.

Ahora bien, el perito ha de saber leer los datos, que se le presentan para su informe, según las claves del matrimonio cristiano. Y esto es lo que explica esa conocida reiteración del Papa Juan Pablo II en las Alocuciones a la Rota Romana de los días 5 de febrero de 1987 y 25 de enero de 1988, llamando la atención a los jueces para que se sirvan de peritos formados científicamente en los grandes principios de la dignidad y la libertad humanas propios de la antropología cristiana. En efecto, el perito, como ha señalado Boccafola⁴, ha de comprender «el matrimonio

4. *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, IV/2, Pamplona 1996, p. 1419.

en el sentido cristiano, como una realidad de gracia, una vocación que incluye el sacrificio y que implica el deber de esforzarse para vencer los obstáculos». Una vez que el perito responde a esta imagen habrá de pensarse en él como un sujeto ajeno al pleito, que reúne en su persona las necesarias condiciones de ciencia, de prudencia y de honradez para cumplir con acierto su cometido. El perito, cualquier perito, sea el nombrado por el juez, a propuesta o no de partes, como lo autoriza el c. 1575, sea el perito privado contemplado en el c. 1581, no dejará de ser un tercero que se incorpora a un proceso entre partes, que le son ajenas, extrañas desde el punto de vista del interés jurídico que poseen dichas partes, para ofrecer las observaciones de una ciencia o técnica de la que goza, y cuyas observaciones deben iluminar la comprensión del objeto procesal expuesto al juez y sobre el que, para decidir en justicia, ha de alcanzar este último la requerida y personal certeza moral (c. 1608 § § 1, 2 y 3).

Antes dijimos del abogado que, al asistir a la parte litigante, se ha de entender que su postura procesal es la de la parcialidad, aunque entendida tal parcialidad en la óptica de la rectitud de una conducta moral que opera en búsqueda del bien específico que estima pertenecerle a la parte, a la que el abogado presta su ayuda, y que debe serle reconocido por el juez. El perito, por el contrario, incluso el designado por el CIC como privado, en cuanto tercero al proceso, a quien ha de asistir y ayudar es al juez para que éste pueda adquirir la necesaria certeza moral. Y, en cuanto tal, debe gozar de esa misma imparcialidad que profesa el juez y de esa independencia moral que es característica de la función judicial. Por esto, el c. 1575 prevé la posible recusación de peritos, al igual que la de otros terceros, los testigos, si merecieran ser tachados de parciales.

No intentamos aquí poner en evidencia las posibles corruptelas morales que puedan darse en los peritos como cabe que se produzcan en cualquier otro profesional, es decir, las posibles dicotomías con los abogados que participen en su propuesta, o la ligereza o negligencia al estudiar los datos de hecho que soportan su pericia, o los compromisos sociales y económicos con los propios interesados en el proceso, o con sus familiares, en el caso del perito privado; o en el cobro de honorarios excesivos, etc. Tampoco aquí nos referimos al c. 1488 § 1, o al fraude de ley definido por el c. 1488 § 2, o la traición del abogado a la fidelidad y lealtad que le obligan con su cliente y por imperio de la ley, como lo con-

firman las sanciones definidas en el c. 1489. Me he propuesto en esta lección elevar la mirada por encima de esas bajas miserias en que podemos incurrir los humanos, unas veces por debilidad, otras por egoísmo, otras por pura malicia. De todas maneras, como decía el «Código de Deontología Jurídica» del Dr. Alejandro Martínez Gil⁵, con referencia a los Médicos Forenses y Peritos Oficiales, éstos «deben emitir sus dictámenes o pericia con arreglo a su ciencia y conciencia, no dejándose llevar de dones, amenazas, simpatía, amistad, etc.». Y más adelante con referencia a los profesionales de la Medicina en general, aclaraba: «Ellos más que nadie deben hacer gala en sus dictámenes de una, si se me permite decirlo así, *brutal objetividad*». Para añadir después: «desconfíen prudentemente de su propio juicio» y «dictaminen sobre bases científicas ciertas; cuando no las haya, díganlo con toda honradez en sus informes y no pretendan darles valor absoluto partiendo de hipótesis bastante relativas».

Por mi cuenta, aquí he intentado, por el contrario, limitarme a fijar el punto de mira en la parcialidad del abogado al servicio del interés legítimo de su cliente, desenvolviendo su actividad en un marco de la búsqueda recta de la verdad para conseguir el bien específico propio de su profesión, que siempre ha de estar enderezada a que la justicia se realice en el proceso. Ahora, ante el perito, subrayo, en cambio, su imparcialidad de los intereses en conflicto; esa asistencia al juez independiente de cualquier otra influencia que pudiera desnivelar su postura, colaborando con recta conciencia a la labor del Tribunal de justicia para que, con la ayuda del hombre sabio, prudente, verdaderamente técnico en el campo de su especialidad, alcance el juez la certeza moral que haga posible dictar una sentencia justa, sin que pierda su autonomía de juicio, pero viviéndose de los criterios científicos y técnicos que el perito le aporta.

En los procesos de nulidad matrimonial la tarea del perito no deja de plantear peculiares y graves dificultades. Su trabajo no se reduce —en todo el campo de las incapacidades (c. 1680), de las imposibilidades psíquicas de asumir compromisos (c. 1095), e incluso en el de la comprensión a lo que alcanza el acto de voluntad manifestado (c. 1096) y, en

5. Madrid 1954, p. 52.

general, en todos los temas que pueden poner en peligro un consentimiento válido— al análisis y a la investigación presente en la que el concurso del perito es requerido, sino que ha de volverse hacia el pasado, intentando remontarse en la historia humana ya transcurrida, buscando reconstruir, sirviéndose de datos actuales que en el proceso consten, la verdadera situación de las personas en aquel entonces sobre el que se ha de juzgar acerca de sus capacidades de conocimiento, acerca de la medida en que pudieron ejercer conscientemente su libertad. No deja de ser tal empeño una empresa difícil.

A veces el perito se ve impedido incluso de reconocer personalmente a la persona a la que se imputa el vicio que pudo generar la nulidad del matrimonio acusada por la parte actora: habrá de servirse entonces el perito de otros datos que indirectamente le instruyan acerca de aquella personalidad a la que divisa distanciada, como a ciegas. Son datos que deben estar sin embargo en el proceso y no fuera de él. Y esto es también prueba pericial, aunque por algunos se le haya podido negar tal condición. Todo sobre lo que el perito informa, y sobre lo que es preguntado por el juez, a veces con la colaboración del oficio público del Defensor del vínculo y el privado de los abogados de parte, es prueba pericial. El juez será, en estos casos —y en todos— quien deberá valorar la prueba pericial teniendo en cuenta precisamente los datos que merecen estar en el proceso, y de los que el perito en su informe se ha servido.

Mas, en ese caminar, indagando, descubriendo, sirviéndose de las deducciones lógicas, abriéndose a las hipótesis probables, manifestando en ocasiones seguridades, y en otras incertidumbres, irá el perito actuando en su imparcialidad y sin otra sumisión que a la ciencia o técnica que posee y a los datos de hecho que les son ofrecidos por el juez para su información. Este caminar hacia la verdad, que en principio se le muestra como velada, requiere de una mente serena y experta en humanidad, y unos conocimientos suficientes, propios de la antropología y del matrimonio cristianos. Este perfil del perito en el proceso de nulidad de matrimonio convertirá su trabajo en un verdadero aporte a la justicia canónica ya que proporcionará al tribunal eclesiástico aquellos elementos de conocimiento de los que, en principio, sus miembros están privados. Y esto ocurrirá con toda pericia procedente de quien ha sido llamado, alguna vez, consultor del juez. Y ocurrirá incluso en todas las oca-

siones, aunque las conclusiones del perito no acierten plenamente, o sus conclusiones no sean tajantes y seguras, aunque queden envueltas entre hipotéticas probabilidades y hasta dubitaciones. Pero ahí encontrará el juez, en su valoración de la prueba, la certeza moral necesaria para la justicia de su propia decisión.